ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Correspondencia.
- 4.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, a efecto de que informen de manera pormenorizada sobre el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, contemplados en el Artículo 12 del Decreto, tercer párrafo, del programa de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Escudo Ciudadano.
- 5.- Iniciativa que presenta el diputado José Ángel Rochín López, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve emitir un atento exhorto al Ciudadano Licenciado Héctor Gustavo Platt Mazón, encargado de despacho de la Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora, para que en uso de sus atribuciones, impulse la creación de una red de playas incluyentes que permitan el acceso pleno y equitativo al derecho, uso y disfrute de los servicios turísticos a las personas con discapacidad en el Estado de Sonora.
- 6.- Dictamen que presentan la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
- 7.- Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 69 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
- 8.- Posicionamiento que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la participación de la juventud en la vida política y social de Sonora.
- 9.- Posicionamiento que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la conmemoración del Día Mundial contra la Prostitución Infantil.
- 10.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima.

**CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN DEL
DÍA 04 DE ABRIL DE 2018.**

02 de abril 2018. Folio 3438.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Atil, Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo, copia certificada del acta de la sesión ordinaria de cabildo, en la cual se acordó otorgar licencias por 90 días a los ciudadanos Antonio Federico Celaya Urías, Presidente Municipal; Luis Alfonso Rodríguez González, Regidor Propietario y Francisca Guadalupe Ibarra Cota, Regidora propietaria.

RECIBO Y ENTERADOS.

02 de abril 2018. Folio 3439.

Escrito de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, acuerdo certificado y acta original, en donde consta que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó la Ley número 278, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en materia de Justicia Laboral. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE RESPECTIVO.**

02 de abril 2018. Folio 3440.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Úres, Sonora, mediante el cual comunican a este Poder Legislativo, de las licencias sin goce de sueldo para ausentarse del cargo de Síndica aprobada a la ciudadana Candelaria Verdugo y del cargo de Regidor Propietario al ciudadano Héctor Gastón Rodríguez Galindo, por un término de 90 días a partir del 01 de abril de 2018; asimismo, comunican que se citará a los ciudadanos María Angélica Dórame Tanori, Síndica Suplente y a Noé Barrón del Cid, Regidor Suplente, para que asuman la responsabilidad que les corresponde. **RECIBO Y ENTERADOS.**

02 de abril 2018. Folio 3441.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo, informe de la recaudación de ingresos adicionales y excedentes recibidos actualizados durante el ejercicio fiscal 2017, en los rubros establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por esta Soberanía. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.**

03 de abril 2018. Folio 3442.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Bavispe, Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo, los documentos que conforman su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.**

03 de abril 2018. Folio 3443.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Bacerác, Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo, los documentos que conforman su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.**

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, diputados integrantes del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, de esta Sexagésima Primera Legislatura, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente **Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, a efecto de que informen de manera pormenorizada sobre el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, contemplados en el Artículo 12 del Decreto, tercer párrafo, del programa de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Escudo Ciudadano, cuya viabilidad sustentamos bajo la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin lugar a dudas, la seguridad es un tema de interés para gobierno y los ciudadanos.

Las cifras en materia de seguridad al cierre de 2017, muestran un panorama complicado en Sonora.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre del año pasado, se presentaron delitos de alto impacto como homicidios dolosos, robo a negocios , vehículos y bancos.

Adicionalmente, el robo a bancos subió 125%, esto al registrarse 9 robos a sucursales bancarias el año pasado, contra 4 robos registrados en 2016.

Ahí están los datos y estos son contundentes: La política de seguridad pública de este gobierno no ha cumplido las expectativas desafortunadamente para todos quienes vivimos en Sonora.

Hay mucho por hacer para devolverle la tranquilidad a los sonorenses, tranquilidad que hasta hace poco tiempo disfrutaban sin problemas.

Es por ello que, ante esta grave problemática, el pasado mes de diciembre, este Congreso tuvo a bien aprobar, dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, el redireccionamiento de recursos al rubro de la seguridad pública.

El Artículo 12, tercer párrafo, del Decreto en mención establece que:

“Del monto total del presupuesto de egresos destinado a la Fiscalía General de Justicia, las Secretarías de Educación y Cultura, Salud Pública, Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, el Instituto Sonorense de la Juventud y el Instituto Sonorense de Cultura, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo que participan en el Consejo Directivo de Transversalidad previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, se destinará un 20 por ciento para ejercerlo exclusivamente en el cumplimiento de los subprogramas y acciones que en el marco del Programa de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Escudo Ciudadano, se lleven a cabo en las 102 colonias focalizadas en los 10 municipios del Estado de Sonora, garantizando con ello el cumplimiento del eje transversal de las acciones y subprogramas del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

No es una cantidad menor: Estamos hablando de una suma de 1,643.6 millones de pesos.

Esta cifra equivale al 75% del presupuesto autorizado a la Secretaría de Seguridad Pública para este año.

Compañeros Legisladores, el exhorto que hoy ponemos a su consideración busca que el gobierno informe y haga transparente el uso y el destino de esos recursos, así como que explique en qué medida contribuyeron a revertir el panorama actual de inseguridad en esas colonias y municipios de nuestro Estado.

Es de la mayor relevancia que el Poder Ejecutivo, en un ejercicio de gobierno abierto, rinda cuentas sobre cómo se están gastando estos recursos en el programa Escudo Ciudadano, y si su aplicación tuvo impacto en el combate a la inseguridad.

Los recursos públicos son escasos, por eso los ciudadanos exigen a sus gobiernos que se utilicen de manera eficiente y, sobre todo, que éstos se traduzcan en beneficios reales para ellos y sus familias.

Los ciudadanos no esperan más, pero tampoco esperan menos de sus gobiernos.

En este sentido, proponemos hacer una respetuosa invitación a la sociedad civil y a todos los organismos ciudadanos vigilantes de la seguridad, a que se involucren activamente en la supervisión y vigilancia de estos recursos públicos.

Se necesitan más que nunca instancias ciudadanas que velen por los intereses de la sociedad, y más en un asunto tan delicado en el momento actual.

Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en su Artículo 17, fracción IV, que señala como atribución del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización el practicar las auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, así como los

programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos, proponemos respetuosamente que se incluya en el programa anual de auditorías para el ejercicio fiscal 2018 una auditoría específica relativa a estos recursos públicos, abonando con ello a una efectiva fiscalización presupuestal.

En tema de la seguridad pública hay muchos retos que atender, permítanme señalar, a modo de ejemplo, una situación que enfrenta nuestro Estado.

De acuerdo al diagnóstico nacional, dado a conocer recientemente, sobre las policías preventivas de las entidades federativas, elaborado por la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, Sonora presenta rezagos importantes que cubrir.¹

De acuerdo a ese diagnóstico, el estándar mínimo es contar con al menos 1.8 policías por cada mil habitantes. Aquí en Sonora solo tenemos 0.4 policías por cada mil personas, no sólo estamos muy por debajo de ese estándar, también estamos por debajo del promedio nacional que es de 1.1 policías por cada mil habitantes.

Compañeras Diputadas y Diputados, tenemos una problemática muy grave ante nosotros, debemos actuar en consecuencia sin distingos partidistas, anteponiendo siempre la obligación suprema que tienen las instituciones de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y su patrimonio, las autoridades están obligadas a dar resultados, ser eficientes y rendir cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta con Punto de:

ACUERDO

¹ Secretaría de Gobernación. Modelo Óptimo de la Función Policial. Diagnóstico Nacional Sobre Las Policías Preventivas De Las Entidades Federativas (corte al 31 de octubre de 2017). Diciembre de 2017.

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que informen a esta Soberanía, los resultados que se obtengan sobre el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, contemplados en el Artículo 12 del Decreto, tercer párrafo, del programa de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Escudo Ciudadano.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al Titular del Instituto de Auditoría y Fiscalización Superior, a efecto de que, respetando su autonomía constitucional, analice la posibilidad de incluir en su programa anual de auditorías para el ejercicio fiscal 2018, una auditoría sobre el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, contemplados en el Artículo 12 del Decreto, tercer párrafo, del programa de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Escudo Ciudadano.

TERCERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la sociedad civil y a todos los organismos ciudadanos vigilantes de la seguridad a efecto de que participen activamente en la supervisión y vigilancia del ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, contemplados en el Artículo 12 del Decreto, tercer párrafo, del programa de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Escudo Ciudadano, que son en beneficio de la seguridad de todos los sonorenses.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos muy respetuosamente que se considere el presente asunto como de obvia resolución, y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora, a 4 de Abril de 2018

DIPUTADA ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA

DIPUTADA ALEJANDRINA RUIZ VALLE

DIPUTADA LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ

DIPUTADO MOISÉS GÓMEZ REYNA

DIPUTADO JESÚS MARÍA MARTÍNEZ SAMANIEGO

DIPUTADO JOSÉ MARÍA GAXIOLA RANGEL

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ANDRADE SANCHEZ

DIPUTADO JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

DIPUTADO LUIS G. SERRATO CASTELL
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Honorable Asamblea:

El suscrito, Diputado José Ángel Rochín López, Representante Parlamentario del Partido MORENA de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sonora 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como de los artículos 32 fracción II y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Sonora, someto a la consideración de este órgano legislativo, para su análisis, discusión y aprobación, la siguiente **INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DEL FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPULSE LA CREACIÓN DE UNA RED DE PLAYAS INCLUYENTES QUE PERMITAN EL ACCESO PLENO Y EQUITATIVO AL DERECHO, USO Y DISFRUTE DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE SONORA**, para lo cual fundo la procedencia de la misma bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud, se estima que “el 15% de la población mundial, unos mil millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. En la Región de las Américas unos 140 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, participación social y política y salud. Como consecuencia, no disfrutan del acceso a la sociedad igual al resto de las personas. Algunas veces, el estigma y la discriminación se convierten en el principal obstáculo para la participación de las personas con discapacidad de forma completa y equitativa, incluyendo el acceso a los servicios de salud” (PAHO, 2016).

El último informe de INEGI “A propósito del día internacional de personas con discapacidad. 2015”, los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica

Demográfica, arrojan que casi 7.2 millones de mexicanos reportan tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas y alrededor de 15.9 millones tienen dificultades leves o moderadas para realizar las mismas actividades (INEGI, 2015)

De acuerdo a cifras del último censo del mismo INEGI, en Sonora el 5.5 por ciento de la población padece algún tipo de discapacidad, esto equivale a alrededor de 146 mil hombres, mujeres, niñas y niños, jóvenes o adultos mayores de nuestro estado cuya magnitud de problemas que aquejan a este sector son diversas.

El pasado mes de octubre, esta Soberanía aprobó la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora, cuyo objetivo principal es garantizar el desarrollo de las personas con alguna discapacidad mental o motriz.

En ese sentido, la Representación Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Sonora ha sido constantemente promotora de la atención a este sector tan desprotegido. Por ello, en la víspera del periodo vacacional, es necesario que este sector tenga derecho al uso y disfrute de las playas en todo el estado de manera incluyente.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno del Estado inauguró la primera etapa del proyecto de turístico de playa incluyente en Bahía Kino. La primera parte del proyecto denominado “Kino Mágico”, tuvo una inversión de 62 millones de pesos. El parque y playa cuentan con área de acceso y estacionamiento, barda y pista perimetral, andador de madera con mirador de acceso universal a la playa, rampas para discapacitados y espacios deportivos, entre otros aspectos (Lozano Ángel, El Imparcial, 12/09/2017).

Este tipo de proyectos de playas inclusivas o incluyentes, es decir con infraestructura especial para personas con discapacidad, son un modelo bastante desarrollado en diversos países como Estados Unidos, España, Francia, Perú y Chile, por mencionar algunos.

En México, la primera playa incluyente se construyó en Playa del Carmen, Quintana Roo en el año 2013, que de acuerdo con información oficial, cuenta con rampas de acceso para sillas de ruedas hasta la orilla del mar, camastros acuáticos, andaderas anfibias para niños y adultos, bastones especiales para ciegos, módulos de servicio, señalizaciones especiales, toallas, bancos, regaderas y chalecos salvavidas, así como personal especializado.

Asimismo, en mayo de 2016 se inauguró la segunda playa incluyente en Bahía de Cuastecomates, en Cihuatlán, Jalisco. Aquí incluso, el pueblo fue acondicionado con infraestructura para personas con discapacidad, como rampas y señales podotáctiles para personas invidentes, algo verdaderamente vanguardista.

Sin embargo, es necesario que este tipo de proyectos sean realmente incluyentes y se amplíen en cuanto al espacio geográfico que deben abarcar y evitar que con los años, queden aislados. Recientemente el Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Turismo realizar mayor inversión para impulsar la creación de este tipo de espacios públicos (Notimex, 31/07/2017).

Por todo lo anterior, es que venimos a plantear ante este Pleno, solicitar a las autoridades turísticas de nuestra entidad, la creación de una Red de Playas Incluyentes que garanticen el acceso equitativo a espacios de recreación turística de personas con discapacidad en todo el territorio sonorense.

En Morena, los Protagonistas del Cambio Verdadero rechazamos cualquier forma de opresión: como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Luchamos contra cualquier forma de discriminación y basamos nuestro quehacer cotidiano en valores democráticos y humanistas, tal como lo establece nuestra Declaración de Principios

En consecuencia, con fundamento en los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con punto de:

ACUERDO

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve emitir un atento exhorto a la Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora, para que en uso de sus atribuciones, impulse la creación de una red de playas incluyentes que permitan el acceso pleno y equitativo al derecho, uso y disfrute de los servicios turísticos a las personas con discapacidad en el Estado de Sonora.

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se considere el presente asunto como de urgente resolución y se dispense el trámite de Comisión, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora a 04 de abril de 2018.

“Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación”

C. DIP. JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN LÓPEZ
Representante Parlamentario de Morena
LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora

**COMISIÓN DE GOBERNACION Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES.**

DIPUTADOS INTEGRANTES:

**LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ
CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS
RAMÓN ANTONIO DÍAZ NIEBLAS
JAVIER VILLARREAL GÁMEZ
JORGE LUIS MÁRQUEZ CAZARES
FLOR AYALA ROBLES LINARES
FERMÍN TRUJILLO FUENTES**

HONORABLE ASAMBLEA:

A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Sexagésima Primera Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de este Poder Legislativo, escrito signado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual presentan a esta Soberanía, **INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

La iniciativa de mérito se presentó ante el Pleno de esta Soberanía, el día 21 de septiembre del 2017, fundamentándose en los siguientes argumentos:

"El Título Cuarto en su Capítulo Uno, de nuestra Constitución Estatal establece la División de Poderes de nuestro Estado, puntualizando en él, las disposiciones generales al respecto, que el Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Por lo que, las bases generales que habrán de regir la vida institucional de uno de los mencionados tres poderes, como es el caso del Legislativo, se encuentran contempladas en el Capítulo Dos del Título Cuarto, de nuestra Constitución Estatal.

Aunado a lo anterior, en el mismo, se establece que será en la Ley Orgánica donde se especifiquen las condiciones propias de dicho poder público, mediante los cuales se brinda oportunidad y estabilidad a toda la actividad Legislativa.

En este sentido, en esta ocasión, deseo referirme a las atribuciones del Presidente del Congreso, establecidas en el contenido del artículo 66 de la Ley Orgánica en mención, de las cuales se advierte que fungirá como representante legal del Congreso del Estado, entre otras, de las cuales no se enuncia ninguna respecto de la celebración de convenios ni con instituciones de carácter público ni privado, ni de ninguno otro.

Recordemos que, un convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más instituciones, implicando la cooperación interinstitucional a todo acto celebrado, en donde la finalidad es siempre la de aprovechar mutuamente los recursos y las fortalezas del otro.

Es a través de ellos que, se tiene la posibilidad de mejorar lo que sea que se desee mejorar, fortaleciendo y favoreciendo los procesos operativos y de desarrollo institucional, aquellos que fortifiquen la capacidad institucional para optimizar, diseñar, ejecutar, redignificar y elevar la calidad de los servicios y prestaciones en el área propuesta, además se puede favorecer el intercambio de ideas, y mecanismos que puedan beneficiar al trabajo cotidiano.

Ciertamente, considero, que, persiguiendo los propósitos apenas citados, es indistinto si los convenios se celebran con instituciones públicas o privadas, pues con la buena fe que este tipo de actos implica, no es viable limitar o acotar el abanico de oportunidades de mejoría que estos pueden representar.

Pues bien, con dicha potestad conferida, el mismo, está en posibilidad de, actuar en representación del Congreso del Estado, y, por tanto, estar abierto a la posibilidad de generar puentes de ayuda mutua, bien sea con instituciones educativas, de investigación y de salud entre otras.

Dentro de las áreas de oportunidad que este Congreso puede contemplar, se encuentran todo tipo de Institutos de investigación tal como el Belisario Domínguez, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México UNAM, solo por mencionar algunos de entre muchos otros, de los cuales se pueden adquirir conocimientos y técnicas jurídicas para enriquecer y crecer nuestra técnica legislativa.

Además, pudiera generar convenios con la empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social.

Consideramos un área de oportunidad que DICONSA que es la red de abasto social más grande del país, y que se mueve para garantizar la distribución de alimentos con alto

contenido nutricional y económicamente accesibles, en favor de la población en condiciones de marginación, puede llevar a cabo convenios con este Congreso del Estado en pro de nuestros sonorenses.

Sólo como dato, DICONSA opera el Programa de Abasto Rural (PAR), con 27 mil tiendas comunitarias fijas y 300 móviles en todo el país. Se conforma de 15 sucursales y 19 unidades operativas. Cuenta con 300 almacenes rurales y centrales, tres nuevos almacenes graneleros y más de tres mil vehículos, así como 14 lanchas y animales de carga.

DICONSA distribuye apoyos a 450 mil familias del Programa Prospera y atiende a 556 mil beneficiarios de la Tarjeta Sin Hambre.

Cuando el país enfrenta casos de contingencias, como la que en estos momentos están viviendo nuestros hermanos del centro del país, DICONSA apoya a la Secretaría de Gobernación, en el armado de despensas y mantiene una estrategia de compras sociales de granos con gobiernos estatales.

Una de sus principales funciones es hacer negociaciones para la adquisición de los principales productos básicos que los mexicanos consumen en zonas rurales tales como maíz, frijol, arroz, azúcar, leche, café, harina de maíz, harina de trigo, sal de mesa, aceite, chocolate,

Por ello, la importancia de que este Congreso del Estado, esté facultado para celebrar convenios con instituciones públicas y privadas."

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado,

siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad otorgar de manera expresa, al Presidente del Congreso del Estado de Sonora, la facultad para celebrar convenios de concertación con diversas instituciones privadas y de colaboración con los distintos entes públicos tanto a nivel federal, estatal y municipal.

Desde hace más de dos décadas, los convenios de colaboración y de concertación se han utilizado en nuestro país para la realización de acciones conjuntas en diversas materias como la fiscal, educativa, seguridad pública y salud, por mencionar algunos ejemplos.

El Convenio de Colaboración y de Concertación han constituido con el paso del tiempo, instrumentos jurídicos mediante los cuales dos entes se obligan por escrito y por tiempo determinado para la realización de determinadas acciones. En donde las partes asignan sus recursos económicos, humanos y materiales o, al menos, algunos de ellos para el cumplimiento de su fin, el cual siempre será para satisfacer necesidades públicas de diversa índole.

Así tenemos que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el artículo 9° de su Ley Orgánica cuenta con facultades para celebrar convenios, en los siguientes términos:

ARTICULO 9o.- El Gobernador del Estado podrá celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, en los términos de ley, de los que se deriven, por parte del Estado, la asunción de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos del Gobierno Federal, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Asimismo, podrá celebrar convenios con los Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que estos asuman la prestación de los servicios, la atención de las funciones y la ejecución y operación de las obras a que se refiere el párrafo anterior, o bien, la atención de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos del Gobierno Estatal, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los titulares de las dependencias, cuando así lo determine el Ejecutivo Estatal, podrán firmar en representación del Gobierno del Estado los convenios a que se refiere este artículo, así como los convenios o acuerdos de coordinación o de colaboración que se deriven de los mismos.

Por otra parte, al Poder Judicial del Estado, en el artículo 184 de su respectiva Ley Orgánica, se le otorga la facultad de suscribir convenios, tal y como se muestra a continuación:

ARTICULO 184.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, propondrá a las diversas instituciones de enseñanza superior en el Estado, la suscripción de los convenios relativos, a fin de que los pasantes de las diferentes carreras puedan prestar su servicio social en el Poder Judicial del Estado de Sonora, realizando tanto funciones administrativas como jurisdiccionales.

Como podemos apreciar, en ambos poderes, aunque en el caso del Poder Judicial un poco más limitado, sus titulares gozan de facultades para celebrar convenios para la satisfacción de diversas necesidades, mientras que, el representante legal de esta Soberanía, no cuenta con este tipo de facultades de manera expresa en su respectiva ley orgánica ni en ninguna otra, lo que pone en riesgo de afectar de nulidad la suscripción de este tipo de instrumentos jurídicos que realice el Presidente de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, por la falta de la formalidad que exige el primer párrafo del artículo 2 de

la Constitución Política del Estado, el cual ordena que *"en Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba"*.

Nuestra sociedad siempre está en constante evolución y con ello las necesidades de sus integrantes van cambiando constantemente, lo que hace necesario que el Estado, a través de sus tres Poderes y toda su estructura, realicen diversas acciones para atender cada una de las exigencias demandadas sociales, que finalmente, en el caso particular de este Poder Legislativo, esas exigencias no siempre se satisfacen a través de la aprobación de leyes, sino por medio de otro tipo de acciones como de apoyo, auxilio y colaboración con otros entes públicos y privados, tal y nos lo mandata el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora al que se hace referencia en la consideración tercera del presente dictamen. De ahí la importancia de que este Congreso del Estado cuente con la facultad legal para celebrar convenio de colaboración o de concertación.

En ese contexto, la iniciativa propuesta por los compañeros diputados es viable jurídicamente, puesto que a través de la inclusión de esta nueva facultad al Presidente del Congreso del Estado, se dará certeza jurídica y legalidad a cada uno de los Convenios que suscriba, por lo que decidimos resolver en sentido positivo el decreto objeto del presente análisis y discusión ante esta Comisión Dictaminadora.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVI y XVII y se adiciona una fracción XVIII al artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 66.- ...

I a la XV.- ...

XVI.- Participar con voz en las sesiones de las comisiones de Administración y de Régimen Interno y Concertación Política;

XVII.- Previa aprobación del Congreso, celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas del ámbito municipal, estatal y federal, así como de concertación con instituciones del ámbito privado; y

XVIII.- Las demás que se encomienden en esta ley y las que le asigne el pleno del Congreso del Estado.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"**

Hermosillo, Sonora, a 20 de marzo de 2018.

C. DIP. LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ

C. DIP. CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS

C. DIP. RAMÓN ANTONIO DÍAZ NIEBLAS

C. DIP. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ

C. DIP. JORGE LUIS MÁRQUEZ CAZARES

C. DIP. FLOR AYALA ROBLES LINARES

C. DIP. FERMÍN TRUJILLO FUENTES

**COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS**

DIPUTADOS INTEGRANTES:

CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS.

JAVIER DAGNINO ESCOBOSA

LINA ACOSTA CID

BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA

OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA

IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU

CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA

HONORABLE ASAMBLEA:

A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ésta Sexagésima Primera Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de éste Poder Legislativo, escrito presentado por el Diputado Omar Alberto Guillen Partida de esta LXI Legislatura, el cual contiene iniciativa con proyecto de **DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, fracción VII, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en la sesión del día 06 de marzo de 2018, fundamentándose en los siguientes argumentos:

“La institución del Ministerio Público, desde la reforma constitucional en materia de justicia que entro en vigor en junio de dos mil ocho, ha sido objeto de diversos cambios en su diseño institucional a efecto de fortalecer su función como órgano encargado de la

investigación de los delitos y garante de la legalidad en los procesos judiciales de los que es parte.

Así, gran parte del engranaje del sistema jurídico en nuestro país tiene basada su eficacia en el adecuado funcionamiento de la figura del Ministerio Público, cuya función se ha venido ampliando y desarrollando a fin de adaptarse a los nuevos paradigmas en materia de derechos humanos.

Por otro lado, la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio demanda la modernización y constante actualización, no solo del diseño normativo y la estructura organizacional de la institución, sino también de los recursos humanos y materiales destinados a la función de procuración de justicia, la cual requiere de la disponibilidad de contar con mayores instrumentos y servicios de apoyo a su función, al incrementarse de manera cuantitativa y cualitativa, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la Investigación de delitos, los servicios periciales, la protección a víctimas del delito y demás funciones sustantivas que tiene encomendadas.

En ese tenor, el Congreso del Estado de Sonora, aprobó desde diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la ley 191, que crea el fondo para Procuración de Justicia, a efecto de constituir un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el fin de apoyar a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado con recursos adicionales orientados a coadyuvar a la modernización y mejoramiento de sus funciones institucionales, las cuales, como se dijo anteriormente, se han venido incrementando y multiplicando ante la necesidad de atender con mayor cobertura, eficiencia y oportunidad la demanda de justicia ante el incremento de la población y con ello del fenómeno delictivo en general, lo que genera la necesidad de contar con recursos humanos más capacitados, servicios periciales con alta tecnología y un constante despliegue de la fuerza política al servicio del Ministerio Público.

Bajo ese panorama, el poder reformador del Estado se ha dado a la tarea, en consonancia con las reformas constitucionales a nivel federal, de modificar el marco legislativo que regula la actuación del Ministerio Público en ámbito estatal, a fin de que su funcionamiento resulte acorde al marco normativo en materia de justicia, razón por la que, mediante la ley número 96, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, así como mediante ley número 102, publicada en el mismo medio de difusión el trece de enero de dos mil diecisiete, entre otras cuestiones, se elevó a rango constitucional la figura del Ministerio Público, depositado en una Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que trascendió a la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado, también publicada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, generando con ella un nuevo marco legal y diseño institucional del órgano prosecutor de delitos, asumiendo las funciones que tenía encomendadas la entonces Procuraduría General de justicia del Estado, en términos de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que a la postre resulto abrogada.

De esta manera, la entrada en vigor de las reformas constitucionales mencionadas, y particularmente lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley número 96², publicada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, así como la ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado, generan la necesidad de adecuar el marco normativo que regula el manejo y administración de recursos destinados al apoyo a las funciones del Ministerio Público y que en su momento motivaron la expedición de la ley que crea el Fondo para Procuración de Justicia, a efecto de apoyar con recursos adicionales a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, la que al dejar de ser una dependencia sectorizada a la Administración Pública Estatal, para dar paso a la existencia de un órgano constitucionalmente autónomo, requiere también de recursos adicionales que le permiten desarrollar sus funciones sustantivas de una manera más eficientes, con altos estándares de servicios y calidad, que le permitan hacer frente de manera adecuada a su encomienda de garante de la legalidad y persecutora de delitos.

Asimismo, con la declaratoria de inicio, en el Estado del nuevo sistema de justicia penal, diversos conceptos que integran las fuentes de ingresos del Fondo para Procuración de Justicia del Estado de Sonora, se encuentran destinados a desaparecer, tales como multas impuestas por agentes del Ministerio Público y el importe de cauciones que se hicieran efectivas, en términos de lo dispuesto por artículo 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, siendo que con motivo de vigencia y aplicación de Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo dispuesto en el artículo 231, únicamente resulta posible que se obtenga como ingresos al producto de los bienes que sean objeto, instrumento u objeto del delito y que causen abandono a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Por esa razón, la iniciativa de decreto que se somete a su consideración contempla, principalmente, reformar la fracción V y adicionar una fracción VI, recorriéndose en su orden subsecuente la anterior fracción VI, para quedar como VII, a efecto de establecer de manera puntual, que los recursos que integran el patrimonio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se integran, entre otros conceptos, por el producto de los bienes que sean objeto, instrumento u objeto del delito y que causen abandono a su favor, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, así como los bienes, derechos, productos o cualquier clase de recursos económicos que formaban parte del patrimonio del Fondo para la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, además de todos aquellos que se continúen recibiendo o estén destinados a recibirse por cuenta de dicho fondo, los que podrán aplicarse a los fines que se determinen mediante disposiciones de carácter general que se emitan por Fiscal General del Estado.”

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

²Artículo Segundo. Los recursos materiales, presupuestales, humanos, así como los bienes muebles e inmuebles y contratos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, pasan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- La iniciativa que es materia del presente dictamen tiene por objetoprecisar y ampliar la definición de los recursos que constituyen el patrimonio de la Fiscalía General del Estado, principalmente, desapareciendo el Fondo de Procuración de Justicia del Estado de Sonora para que sus recursos pasen a formar parte de dicho patrimonio, con el propósito de fortalecer la autonomía de este importante órgano del

Estado, para que pueda atender adecuadamente sus funciones, por lo que en ese nuevo contexto jurídico es necesario adicionar las nuevas figuras jurídicas que deben integrarse al patrimonio de la Fiscalía y desaparecer aquellos entes que ya no tienen razón de ser, para que se organicen y administren de manera acorde a las nuevas necesidades del nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado.

La evolución de la institución del Ministerio Público tanto a nivel nacional como en nuestro Estado, a raíz de las profundas reformas que en materia de procuración de justicia se han venido dando a lo largo de más de diez años y que se describen detalladamente en la iniciativa de mérito, han derivado en una completa transformación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía, mediante las reformas constitucionales respectivas, así como, la aprobación de una nueva ley orgánica que ha venido a sustituir a la anterior, nos obligan a tomar las medidas necesarias para adecuar el marco jurídico relacionado, para que el nuevo ente autónomo pueda ejercer su función de procuración de justicia sin obstáculos legales que puedan llegar a comprometer no solo el desarrollo de sus obligaciones sino su misma autonomía constitucional.

Efectivamente, al fortalecer la autonomía del Ministerio Público del Estado, esta Soberanía está atendiendo el reclamo de la sociedad sonorenses de contar con un representante social verdaderamente imparcial, que esté libre de influencias políticas, pero además, podremos garantizar en mejores condiciones, el derecho humano de acceso a la justicia de los sonorenses, puesto que la autonomía del Ministerio Público que exige el nuevo Sistema Penal Acusatorio, es indispensable para alcanzar este noble fin, tal y como lo expresa el Doctor en Derecho Alberto Binder, en su obra *“Principios Fundamentales del Proceso Penal Acusatorio”*, en donde afirma que *“en el proceso penal acusatorio la oposición se resuelve con un mayor contenido garantizador, mientras que en el proceso inquisitivo hay un contenido mayor de realización del poder penal del Estado en detrimento de las garantías... En el proceso penal acusatorio, por el contrario, subyace la idea básica de dividir esas funciones, reservando para el juez lo eminentemente jurisdiccional. Puesto que es, por excelencia, un custodio del Estado de Derecho, en esa*

división de funciones habrá que confiar al juez, precisamente, la preservación de las garantías del individuo... En ese tipo de proceso penal se encomienda la investigación a otro sujeto procesal, el Ministerio Público, que es quien debe estar a cargo de la investigación de los delitos, puesto que su papel es el de “abogado de la sociedad” dejando así al juez la función de controlar la investigación. Corresponde pues al Ministerio Público preparar la investigación”.

No debemos olvidar que el Derecho Humano de Acceso a la Justicia, además de nuestra Carta Magna, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita en el año de 1969, entre otros.

Como podemos darnos cuenta, la importancia de la propuesta sometida a dictamen, si bien podría parecer una cuestión meramente administrativa de poca relevancia, en realidad se trata de un asunto de suma importancia que no debemos dejar de atender, en virtud de que su aprobación significa fortalecer el derecho humano de acceso a la justicia de los sonorenses, al ser parte de las reformas adicionales que debe llevar a cabo esta Soberanía, para garantizar una verdadera autonomía del Ministerio Público del Estado, es decir, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, razón por la cual, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora aprobamos la iniciativa sometida a estudio.

En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII y un párrafo segundo al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para quedar como sigue:

ARTICULO 69.- ...

I a la IV.- ...

V.- El producto de los bienes que sean objeto, instrumento u objeto del delito o asegurados y que causen abandono a su favor, de conformidad con previsto en la legislación aplicable, así como los que le correspondan por efecto de la extinción de dominio;

VI.- Los bienes, derechos, productos o cualquier clase de recursos económicos que formaban parte del patrimonio del Fondo para la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, así como todos aquellos que se continúen recibiendo o estén destinados a recibirse por cuenta de dicho fondo, los que podrán aplicarse a los fines que se determinen mediante disposiciones de carácter general que se emitan por el Fiscal General.

Los lineamientos a que se hace referencia en esta fracción constituirán las reglas para la erogación y aplicación de dichos recursos y en ellos se deberá privilegiar los principios de eficacia, eficiencia, participación ciudadana, transparencia, y rendición de cuentas, y únicamente se podrán aplicar en los siguientes conceptos para fines del mejoramiento de las actividades de desarrollo institucional, capacitación, estímulos y recompensas al personal, equipamiento, apoyo técnico, gastos de operación y, en general, y no podrán destinarse a un fin distinto del mejoramiento de las funciones de procuración de justicia;

VII.- Los demás que determinen las disposiciones aplicables.

...

En relación a los recursos establecidos en las fracciones V y VI, para un adecuado ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de estos recursos, serán parte de sus ingresos y egresos contables, debiendo atender las disposiciones y normativas aplicables en materia de rendición de informes y presentación de la cuenta pública ante el Congreso Local, y estarán sujetos a fiscalización de conformidad a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que crea el Fondo para la Procuración de Justicia del Estado de Sonora y su reglamento, publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y el treinta y uno de marzo de dos mil tres, respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO.- Se extingue como órgano de apoyo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el Fondo para la Procuración de justicia del Estado de Sonora.

ARTÍCULO CUARTO.- Los recursos económicos y derechos que integraban el patrimonio del Fondo para la Procuración de Justicia, así como todos aquellos que se continúen recibiendo o estén destinados a recibirse por cuenta de dicho fondo, pasan a formar parte del patrimonio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a efectos de que sean destinados para fines de que se establezcan en las disposiciones generales que se emitan por su titular, las que enunciativamente podrán consistir en el mejoramiento de las actividades de desarrollo institucional, capacitación, estímulos y recompensas al personal, equipamiento, apoyo técnico, gastos de operación y, en general, para el mejoramiento las funciones de procuración de justicia, para dar cumplimiento adecuado a sus funciones. Se deberá integrar la documentación original que justifique y compruebe el uso y destino de estos recursos. Además en su portal electrónico, mantendrá de manera permanente a disposición del público en general, la información mensual y anual financiera relacionada con el ingreso y la aplicación de los recursos.

ARTÍCULO QUINTO.- Los bienes derechos y recursos económicos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren pendientes de recibir por parte del Fondo para la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, así como todos aquellos que en un futuro, con motivo del trámite de averiguaciones previas vigentes debían destinarse a dicho fondo, deberán ser remitidos por las autoridades correspondientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pasando a formar parte de su patrimonio.

ARTÍCULO SEXTO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora deberá afectar las prevenciones de recursos económicos que resulten necesarios en los casos en que proceda la entrega o devolución de bienes o numerario a favor de los interesados en los casos que corresponda.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"**

Hermosillo, Sonora, a 21 de marzo de 2018.

C. DIP. CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS

C. DIP. JAVIER DAGNINO ESCOBOSA

C. DIP. LINA ACOSTA CID

C. DIP. BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA

C. DIP. OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA

C. DIP. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU

C. DIP. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA

NOTA DEL EDITOR: Las iniciativas y posicionamientos de los diputados se publican en los precisos términos en los que son enviados por quienes los suscriben.